



***MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA PROFESIÓN  
DE ABOGADO POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA  
(EN COLABORACIÓN CON EL ILUSTRE COLEGIO DE  
ABOGADOS DE CANTABRIA)***

**TRABAJO FIN DE MÁSTER**

**CURSO ACADÉMICO 2018-2019**

**TÍTULO:**

**LEGISLACIÓN ESPAÑOLA EN LOS DELITOS DE ODIO Y  
ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO. ESPECIAL  
CONSIDERACIÓN DE DOS CASOS PRÁCTICOS:  
PROFESORES CATALANES TRAS EL 1 DE OCTUBRE Y  
CASOS VALTONYC Y STRAWBERRY.**

**WORK TITLE:**

**SPANISH LEGISLATION IN HATE AND GLORIFICATION OF  
TERRORISM CRIMES. SPECIAL CONSIDERATION OF TWO  
PRACTICAL CASES: CATALAN TEACHERS AFTER OCTOBER 1  
AND VALTONYC AND STRAWBERRY CASES.**

**AUTOR:**

**MARIO ALONSO MAZA.**

**DIRECTORA:**

**CARMEN SÁNCHEZ MORÁN.**



## ÍNDICE:

INTRODUCCIÓN.....	5
ABSTRACT.....	6
1. INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS DE ODIO: CONTEXTO SOCIAL.....	7
2. ARTÍCULO 510 CÓDIGO PENAL TRAS LA REFORMA DE LA LEY.....	10
2.1 INTRODUCCIÓN.....	10
2.2 BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.....	11
2.3 PRECEPTO PENAL.....	13
2.4 PENALIDAD.....	21
3. INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS DE ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO: CONTEXTO SOCIAL.....	22
4. ARTÍCULO 578 CÓDIGO PENAL.....	25
4.1 INTRODUCCIÓN.....	25
4.2 BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.....	26
4.3 PRECEPTO PENAL.....	27
4.4 PENALIDAD.....	32
5. RELACIÓN ENTRE LOS DELITOS DE ODIO Y ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO. ....	34
6. CASO PRÁCTICO: PROFESORES CATALANES TRAS EL 1 DE OCTUBRE.....	35
6.1 INTRODUCCIÓN.....	35
6.2 COLEGIO SEU D'URGELL.....	36
6.3 COLEGIO EL PALAU DE SANT ANDREU .....	41

7. CASO PRÁCTICO: CASOS VALTONYC Y STRAWBERRY.....	43
7.1 CASO STRAWBERRY.....	43
7.2 CASO VALTONYC.....	47
8. OPINIÓN PERSONAL.....	51
9. CONCLUSIONES.....	56
10. BIBLIOGRAFÍA.....	58

## INTRODUCCIÓN:

Vivimos en un mundo en constante cambio, que hace difícil que las distintas legislaciones estatales abarquen todas las conductas humanas penalmente reprochables, no solo por los numerosos supuestos posibles, sino por las diferencias entre las legislaciones existentes.

En la actualidad, las tecnologías se han desarrollado hasta tal punto que, de manera prácticamente ininterrumpida, se desarrolla un intercambio de información que desemboca en situaciones que el legislador no ha previsto, y, por tanto, carentes de total cobertura.

Es en ese punto donde introducimos los delitos de odio y enaltecimiento al terrorismo, delitos, que aunque muy diferentes, enmascaran un mensaje de ataque a individuos por razones políticas, ideológicas o religiosas, y, en definitiva, un ataque que requiere de especial protección por parte del Estado.

Tal y como he mencionado antes, la velocidad a la que el ser humano avanza hace la tarea del legislador muy difícil, especialmente debido a los nuevos escenarios en los que estos delitos se están desarrollando, escenarios que no eran los inicialmente previstos en nuestra legislación penal.

Así, a través de los supuestos prácticos, podremos comprobar cómo se penaliza el enaltecimiento al terrorismo en canciones o mensajes en las redes sociales, o cómo un posible discurso de odio desarrollado en un contexto que sin duda el legislador no contemplaba, esto es, las aulas de un colegio, puede ser susceptible de una respuesta penal de nuestra Justicia.

**Palabras clave:** Terrorismo, odio, discriminación, enaltecimiento, víctimas, libertad de expresión.

## **ABSTRACT:**

We live in a world in constant change, which makes it difficult for the different state legislations to cover all human behavior criminally reprehensible, not only for the matters that are covered, but for the differences between the existing laws.

At present, technologies have developed to such a part in which practically an uninterrupted manner, an exchange of information takes place that leads to situations, which the legislator does not contemplate in the different laws, lacking total coverage.

At this point, where we introduce the crimes of hate and glorification of terrorism, crimes, although very different, introduce a message of attack against individuals for political, ideological, and religious reasons, and, in short, an attack that requires special protection from the State.

As I mentioned before, the speed in which humans are advancing makes the task of the legislator very difficult, especially due to the new stages in which these crimes are being developed, stages, which were not initially provided in our penal legislation.

Thus, through practical examples, we can see how the glorification of terrorism is penalized in songs or messages on social networks, or how a possible hate speech development in a context that the legislator certainly did not contemplate, which is, a school classroom, could be susceptible to a penal response to our justice.

**Keywords:** Terrorism, hate, discrimination, glorification, victims, freedom of expression.

## 1. INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS DE ODIO: CONTEXTO SOCIAL.

Los delitos motivados por la intolerancia hacia ciertos grupos de la sociedad se describen como delitos de odio<sup>1</sup>. Estos delitos requieren de una legislación específica motivada por dos vertientes; por un lado, condenar toda conducta basada en un estereotipo<sup>2</sup>, y, por otro, reconocer el daño causado a las víctimas y transmitir la idea de que la Justicia les protege<sup>3</sup>.

La diversidad de este tipo de delitos, lo podemos apreciar con el siguiente ejemplo: Se incendia un colegio. A ese colegio asisten muchos niños gitanos, y se han producido pintadas en las que se ataca a este colectivo. Se detiene a los autores, y estos reconocen la culpabilidad por el incendio y las pintadas.

Así, aunque la infracción inicial es el incendio y todo puede apuntar a que, provocado o no, nada tiene que ver con una discriminación, las investigaciones demuestran que este fue desarrollado por motivos étnicos o de raza, por tanto se convierte en un delito de odio<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Sobre el concepto de delito de odio, vid. página oficial Ministerio del Interior del Reino de España: <http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/delitos-de-odio/que-es-un-delito-de-odio>.

<sup>2</sup> De acuerdo con la RAE, un estereotipo es “*una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable*”.

<sup>3</sup> Guía Práctica: “*Legislación sobre los Delitos de Odio*”. Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODHIR). Traducción al español del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

<sup>4</sup> Artículo de Opinión: “*El odio al diferente: un delito tipificado en el Código Penal*”. Javier Nistal Burón, jurista del Cuerpo Superior de Instituciones Penitenciarias.

La característica fundamental de este tipo de delitos es la discriminación que enmascaran<sup>5</sup>. Esta discriminación debe materializarse necesariamente en una conducta, dado que de lo contrario, no tendría consecuencias penales.

Los delitos de odio son cada vez más habituales en nuestra sociedad donde los medios tecnológicos actuales permiten una mayor difusión de amenazas, insultos, calumnias, etc., especialmente bajo el manto de las redes sociales y el anonimato.

Una cifra especialmente curiosa se desprende del Cuarto Informe sobre la Evolución de los Incidentes relacionados con los Delitos de Odio en España del año 2016, en el que se indica que el 42,3% de las amenazas e injurias en España se producen en Internet, y el 21,1% mediante dispositivos móviles<sup>6</sup>.

Aunque el peso de los delitos de odio en el cómputo general de la criminalidad en España es bastante bajo, y de hecho ha descendido en torno a un 4%, la discriminación por sexo y género ha ascendido en torno a un 70,8%<sup>7</sup>, lo que supone un hecho bastante importante, a tenor del impacto no sólo sobre la víctima directa, sino también sobre el grupo con el esta se identifica.

Debido al auge de este tipo de delitos, especialmente durante la última década, los Estados participantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa

---

<sup>5</sup> FRANCISCO MORALES, J. y YUBERO JIMENEZ, S. *Del prejuicio al racismo: perspectivas psicosociales*, Colección Estudio, Cuenca, 1996, p. 11 y ss.

<sup>6</sup><http://www.interior.gob.es/documents/10180/5791067/ESTUDIO+INCIDENTES+DE+LITOS+DE+ODIO+2016.pdf/c5ef4121-ae02-4368-ac1b-ce5cc7e731c2>.

<sup>7</sup> Cuarto Informe sobre la Evolución de los Incidentes relacionados con los Delitos de Odio en el Reino de España del año 2016.



(en adelante OSCE), en su reunión de Diciembre de 2003<sup>8</sup>, reconocieron los problemas que plantean los delitos de odio y se comprometieron a combatirlos:

- *“La OSCE se esforzará por combatir toda incitación al odio que pueda ser alimentada por propaganda racista, xenófoba y antisemita distribuida por Internet<sup>9</sup>”.*

- *“Se debe contrarrestar todo acto de violencia, intolerancia, extremismo o discriminación contra dichos grupos étnicos, lingüísticos y de otra índole, así como contra trabajadores migrantes, peticionarios de asilo y otros inmigrantes, y se deberá exigir responsabilidad a toda persona que cometa alguno de dichos actos<sup>10</sup>”.*

El problema más acuciante a la hora de combatir estos delitos, no solo es la falta de legislación, sino las diferencias que hay entre las existentes, provocando que algunas conductas en ciertos Estados no se encuentren debidamente perseguidas.

Así, dependiendo del modelo legislativo, el contenido de estos artículos podrá tener uno u otro significado. Los términos que aparecen habitualmente en los distintos Códigos Penales en relación con estos delitos se han venido denominando como

---

<sup>8</sup> Undécima Reunión del Consejo Ministerial 1 y 2 de Diciembre de 2003: *Estrategia de la OSCE frente a las amenazas contra la estabilidad y la seguridad en el siglo XXI*, Maastricht, 2003.

<sup>9</sup> Respuesta nº 37 *relativa a las amenazas suscitadas por la discriminación y la intolerancia*: Undécima Reunión del Consejo Ministerial 1 y 2 de Diciembre de 2003: *Estrategia de la OSCE frente a las amenazas contra la estabilidad y la seguridad en el siglo XXI*, Maastricht, 2003.

<sup>10</sup> Respuesta nº 38 *relativa a las amenazas suscitadas por la discriminación y la intolerancia*: Undécima Reunión del Consejo Ministerial 1 y 2 de Diciembre de 2003: *Estrategia de la OSCE frente a las amenazas contra la estabilidad y la seguridad en el siglo XXI*, Maastricht, 2003.

“*condiciones personales*” por guardar una especial relación con el núcleo de nuestra identidad personal, o “*causas de discriminación*”, por ser habitualmente algunas de estas condiciones las que producen efectos discriminatorios en colectivos tradicionalmente discriminados<sup>11</sup>.

Es por ello que tanto la jurisprudencia como la doctrina entienden que el listado contenido en los delitos de odio, relativo a los distintos tipos de discriminación, debe operar bajo una fórmula de clausula abierta.

## **2. ARTÍCULO 510 CP TRAS LA REFORMA:**

### **2.1 INTRODUCCIÓN:**

El artículo 510 del Código Penal tiene su origen en el antiguo artículo 165 ter, que tipificaba el delito de provocación a la discriminación<sup>12</sup>. Este artículo, basó su fundamentación en la escalada de acontecimientos racistas y xenófobos que acontecieron en nuestro país en la década de los años noventa<sup>13</sup>.

Tras la Reforma del Código Penal a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de

---

<sup>11</sup> Informe de Delimitación Conceptual en Materia de Delitos de Odio: Estudio encargado por la Comisión de Seguimiento del Convenio de colaboración y cooperación Interinstitucional contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia financiado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Autor: D. Juan Alberto Díaz López, 2018.

<sup>12</sup> Ley Orgánica 4/1995, de 11 de Mayo, en la que se introduce el delito de provocación a la discriminación.

<sup>13</sup> Comentarios prácticos al Código Penal. Tomo VI. Editorial Aranzadi, S.A.U., Enero de 2015.

Marzo, el mencionado artículo 510 ha sufrido grandes cambios, un simple vistazo a la redacción de ambos artículos antes y después de la reforma nos permite comprobar cómo las acciones típicas y los motivos discriminatorias se han visto ampliados<sup>14</sup>.

Sin duda, esto es debido a las interpretaciones realizadas por la Sala 2ª del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, demás órganos judiciales, y un sector doctrinal, los cuales hacen prevalecer el derecho a la libertad de expresión frente a algunas modalidades de delitos de odio<sup>15</sup>.

## **2.2 BIEN JURÍDICO PROTEGIDO:**

El bien jurídico protegido por el artículo 510 podría describirse como el derecho a no ser discriminado, sin embargo, no existe un consenso doctrinal al respecto, así, según Portilla Contreras<sup>16</sup>, se protege un bien jurídico diferente según la conducta típica descrita en cada apartado.

Según la Real Academia Española (en adelante RAE), debemos entender discriminar como “*dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo*”<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Cuadro Comparativo Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre del Código Penal; Observatorio de la Justicia y de los Abogados – Área Procesal Penal; Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

<sup>15</sup> Ponencia del Fiscal del Tribunal Supremo D. Manuel-Jesús Dolz Lago: *Los Delitos de Odio en el Código Penal tras la Modificación Operada por la LO 1/2015- Breve Referencia a su Relación con el Delito del Art. 173 CP*.

<sup>16</sup> PORTILLA CONTRERAS, G. *La represión penal del ‘discurso del odio*, Comentario a la reforma penal de 2015, Thomson Reuters-Aranzadi, 2015, p.722.

<sup>17</sup> Diccionario Real Academia Española.

Este trato que describe la RAE se puede realizar tanto a través de una norma jurídica como a través una acción, de modo directo o indirecto, por parte de los Poderes Públicos o por un particular, con o sin intención, y contra una persona perteneciente a un colectivo o a una minoría caracterizada por una serie de rasgos físicos, ideológicos o sociales, que les identifica como colectivo, y cuya situación es, en general, de inferioridad<sup>18</sup>.

Podemos entender, por tanto, que existe una doble dimensión dentro del bien jurídico protegido por el artículo 510, así podemos ver cómo una conducta discriminatoria puede lesionar el bien jurídico individual de la persona concreta sobre la que se dirija la conducta y, a su vez, al pertenecer esta a un colectivo, sus miembros verán lesionado el suyo<sup>19</sup>.

En contra de esta doble dimensión, Machado Ruiz<sup>20</sup> entiende que no debemos entender el bien jurídico protegido de forma acumulativa, sino que debemos entender que se ha lesionado de forma conjunta a los integrantes de la minoría y no individualmente a cada uno de ellos.

En todo caso, la conducta típica de este artículo sí que manifiesta una doble dimensión, en cuanto que abarca diversos supuestos con responsabilidad penal, al poder dirigirse el sujeto activo contra: *“un grupo, una parte del mismo o contra una persona*

---

<sup>18</sup> TAPIA BALLESTEROS, P. *La discriminación laboral*, Tirant lo Blanch, Valencia 2014, p. 141-143.

<sup>19</sup> Comentarios prácticos al Código Penal. Tomo VI. Editorial Aranzadi, S.A.U., Enero de 2015. ISBN 978-84-9098-845-9.

<sup>20</sup> MACHADO RUIZ, M.D. *La Discriminación en el Ámbito de los Servicios Públicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 131 y ss.

*determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos... ”.*

No debemos olvidar que, cuando se manifiesta un mensaje por razón de orientación sexual, raza, sexo etc., aun atacándose a una persona en concreto, la mera acción discriminatoria implica un mensaje general, por ejemplo, si yo discrimino a una persona por ser de raza negra, esto conlleva una incitación al racismo en general.

Además, con la descripción pormenorizada de los sujetos pasivos que se hace tras la Reforma del año 2015, se resuelve el conflicto doctrinal que consideraba que antiguamente no se protegía a los sujetos individuales al mencionarse solo en el precepto “*grupos y asociaciones*”<sup>21</sup>

### **2.3 PRECEPTO PENAL:**

En primer lugar, debemos transcribir el artículo 510 tal y como aparece reflejado en nuestro Código Penal:

*“Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:*

*a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.*

---

<sup>21</sup> MUÑOZ CONDE, F. *Manual de Derecho Penal, Parte General en colaboración con García Arán*, 9ª ed., Valencia, 2015.

*b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.*

*c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos.*

**2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses:**

*a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean*

*idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos.*

*b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución.*

*Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos.*

*3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas.*

*4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado.*

*5. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente.*

*6. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos.*

*En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo”.*

Con la reforma, se han ampliado las conductas recogidas en el tipo penal, de esta manera, podemos encontrar una primera parte que tipifica las conductas y los actos preparatorios del delito, y una segunda parte que hace lo propio con las conductas que lesionan el bien jurídico protegido, junto con otras que lo ponen en peligro.

El tipo básico del artículo 510 CP se encuentra recogido en su apartado primero, el cual se subdivide en tres apartados:

En el primero de ellos se sanciona a quienes públicamente *“fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia”*.

La inclusión del término *“incitar directa o indirectamente”* supone seguir la línea jurisprudencial emanada del Tribunal Constitucional, el cual ha determinado que la constitucionalidad de la incitación indirecta depende de que *“genere o incremente el riesgo de lesión del bien jurídico, esto es, forje un peligro cierto de generar un clima de hostilidad que pueda desembocar en actos discriminatorios o violentos”<sup>22</sup>*.

---

<sup>22</sup> STC 235/2007, de 7 de Noviembre.



El tipo penal abarca ahora nuevas conductas que incluyen, junto al odio, la discriminación, la violencia, y la hostilidad, todo ello en palabras del legislador, para seguir con los dictámenes derivados de la jurisprudencia europea<sup>23</sup> y constitucional<sup>24</sup>.

En el segundo de ellos se sanciona a quienes *“produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan, escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia”*.

Este apartado ha generado críticas de la doctrina<sup>25</sup>, especialmente debido a que la posesión de material apto para fomentar el odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia, no supone la realización de una acción que pueda producir dichos efectos por lo que se penalizan actos preparatorios de actos preparatorios<sup>26</sup>.

Finalmente, se sanciona a quienes *“públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, enaltezcan a sus autores [...] cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación”*.

En la STC 235/2007, se declaró inconstitucional la tipificación de los delitos

---

<sup>23</sup> STEDH: Caso *“Feret v. Belgium”*, de 16 de Julio de 2009.

<sup>24</sup> STC 235/2007, de 7 de Noviembre.

<sup>25</sup> PORTILLA CONTRERAS, G. *La represión penal del ‘discurso del odio*, Comentario a la Reforma Penal de 2015, Thomson Reuters-Aranzadi, 2015, p.722.

<sup>26</sup> Comentarios prácticos al Código Penal. Tomo VI. Editorial Aranzadi, S.A.U., Enero de 2015. ISBN 978-84-9098-845-9.

relativos a la negación del genocidio y demás delitos contra la Comunidad Internacional, pero ello no ha evitado que se introduzca este precepto en nuestro Código Penal tras la Reforma de 2015.

En la Exposición de Motivos de la Ley 1/2015, se habla de la adaptación de estos nuevos preceptos penales a la jurisprudencia y a los acuerdos nacionales e internacionales, sin embargo, eso no obsta para que diversos sectores incidan en que de nuevo se establece un adelantamiento desmesurado de las barreras de protección, al vincularse este tipo de delitos “*cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación*” y no cuando “*las conductas puedan incitar a la violencia o al odio contra tal grupo o un miembro del mismo*”<sup>27</sup>.

El artículo 150 en su apartado segundo, prevé delitos de lesión, así el primero de ellos tipifica como delito “*la lesión de la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito*”, al tiempo que establece la punibilidad de algunos actos preparatorios de estas conductas al sancionar a quienes “*produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas*”.

Esto conlleva el mismo problema y, por tanto, la misma crítica anteriormente indicada, al volver a penalizar los actos preparatorios de actos preparativos.

En el apartado segundo, se sanciona el enaltecimiento “*por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada*”.

---

<sup>27</sup> Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de Noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho Penal.

De igual manera, podemos manifestar que se obvia un requisito básico, esto es, la protección del derecho a la libertad de expresión, contenido en la Decisión Marco de 2008 (en adelante DM 2008), esto es “*que las conductas puedan incitar a la violencia o al odio contra tal grupo o un miembro del mismo*”<sup>28</sup>.

Respecto a tipos agravados, los encontramos en los artículos 510.3 y 510.4 CP, en los que se contienen disposiciones que agravan las penas anteriores, “*por el uso de un medio de comunicación social, internet, o mediante uso de tecnologías de la información*”, o bien porque “*resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo*”.

La justificación de estas agravaciones se debe sin duda al posible acceso de un mayor número de personas a los mensajes, acciones o conductas que inciten al odio.

En todos los tipos descritos, el sujeto pasivo será el mismo: un grupo, una parte del grupo o cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a un grupo.

Respecto a las causas por las que se puede cumplir el tipo penal, tradicionalmente han venido siendo criticadas por la descripción que se hace de las mismas, descripción que, tras la Reforma de 2015, ha quedado aún más confusa, así se habla de “*motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión, creencias y situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza [...]*”, supuestos que parecen comprender las mismas situaciones<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Artículo 1.1 Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de Noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal.

<sup>29</sup> Reflexión realizada en Comentarios prácticos al Código Penal. Tomo VI. Editorial Aranzadi, S.A.U., Enero de 2015. ISBN 978-84-9098-845-9.

Esta reflexión puede extenderse a los términos “*origen nacional*” y “*nación*”, que aparecen como independientes. Así, según Roig Torres<sup>30</sup>, con el primero de los términos se abarca “*la discriminación producida tanto por la nacionalidad actual como por la de nacimiento*” de manera que la pertenencia a una nación como circunstancia independiente resulta innecesaria.

Los problemas interpretativos básicos de estos preceptos giran en torno a su delimitación, así según García Álvarez<sup>31</sup> hablamos de raza como “*grupos humanos que se distinguen por el color de piel*”; de etnia como “*la pertenencia a un grupo con ciertos caracteres propios con independencia de que también tengan un determinado color de piel*”, y respecto a la discriminación por situación familiar, debemos entenderla como todo aquello que abarque “*la filiación, estado civil y nivel económico o social de la familia*”.

Finalmente, junto a los cambios anunciados, podemos destacar la sustitución del término “*minusvalía*” por “*discapacidad*”<sup>32</sup>, y la entrada de los términos “*identidad sexual*” y “*razones de género*”<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup> ROIG TORRES, M. *Los delitos de Racismo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 1255.

<sup>31</sup> GARCÍA ÁLVAREZ, P. *El Derecho Penal y la Discriminación*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004, p. 65 y ss.

<sup>32</sup> Cambio motivado en aplicación del Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de Diciembre de 2006 y de la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

<sup>33</sup> Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en relación con la inclusión del término “género”.

## 2.4 PENALIDAD:

Con la reforma, se distingue entre las penas de los apartados primero y segundo que establecen “*pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses*” y “*pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses*”, respectivamente.

En los tipos agravados comprendidos en los apartados tercero y cuarto, la pena se impondrá “*en su mitad superior, pudiendo elevarse hasta la superior en grado, si los hechos resultan idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo*”.

En el apartado quinto, se establece una pena de inhabilitación especial “*para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre*”. El cumplimiento de esta inhabilitación se desarrolla de forma sucesiva al de la privación de libertad, si bien la duración dependerá de la gravedad, número y circunstancias del o de los delitos y del delincuente.

Finalmente, el artículo 510 en su apartado sexto habla de la “*destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, artículos y cualquier soporte objeto del delito, así como la retirada de contenidos cuando el delito se haya cometido mediante tecnologías de la información y comunicación, estableciéndose el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación*<sup>34</sup>”.

---

<sup>34</sup> Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo, se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas introducida por el artículo 510 bis CP.

### **3. INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS DE ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO: CONTEXTO SOCIAL.**

Habitualmente, se entiende que el objetivo básico del terrorismo es la quiebra de las instituciones democráticas existentes. El terrorismo se vale de todos los medios a su alcance, incluyendo el intento de participar en la vida política a través de partidos u organizaciones que enmascaran su proyecto ideológico<sup>35</sup>.

Ante esta situación, cada Estado se encuentra en la obligación de desarrollar las medidas adecuadas para evitar su actividad, especialmente teniendo en cuenta que el terrorismo opera en su máximo apogeo cuando hay un entorno social que justifica y apoya la violencia como medio para conseguir sus fines<sup>36</sup>.

El problema radica en determinar cuándo las acciones que puede ejercitar el Estado en defensa de la libertad y de los valores constitucionales pueden comportar la existencia de una limitación o restricción al ejercicio de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, y, por tanto, en establecer el margen de actuación de cada Estado.

Los últimos acontecimientos, especialmente aquellos derivados del terrorismo yihadista, han hecho que el legislador trate de cubrir cualquier tipo de actividad terrorista que pueda desarrollarse y que afecte no solo al Estado de Derecho, sino a la vida,

---

<sup>35</sup> Artículo de Opinión: *El Enaltecimiento del Terrorismo*, Juan Manuel Fernández Martínez. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Revista Aranzadi Doctrinal Num.10/2010, Editorial Aranzadi, 2010.

<sup>36</sup> Artículo de Opinión: *El Enaltecimiento del Terrorismo*, Juan Manuel Fernández Martínez. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Revista Aranzadi Doctrinal Num.10/2010, Editorial Aranzadi, 2010.

integridad o la libertad de las personas<sup>37</sup>.

En estas circunstancias, introducimos la apología al terrorismo, considerada como una de las mayores consecuencias del terrorismo, especialmente cuando esta abarca no solo las conductas desarrolladas por estos grupos, sino cuando se ensalza a sus causantes.

La evolución de este delito pasa indispensablemente por un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Así, inicialmente este había declarado inconstitucional la penalización del elogio o la defensa de ideas, o la expresión de ideas subjetivas sobre acontecimientos históricos o actuales<sup>38</sup>.

Ya en el Código Penal de 1995 se contempla la regulación de la apología, indicándose que esta solo resulta punible en los casos en los que suponga una incitación directa para la comisión del delito<sup>39</sup>.

El Tribunal Constitucional ha amparado la penalización de la apología concretando su ámbito de aplicación. Así, el tribunal establece que este tipo de delitos

---

<sup>37</sup> Artículo de Opinión: *Interpretación del Enaltecimiento de Terrorismo conforme a la Directiva UE 2017/541, de 18 de marzo*, Javier Muñoz Cuesta. Fiscal del Tribunal Supremo, Revista Aranzadi Doctrinal Num.8/2017, Editorial Aranzadi, 2017.

<sup>38</sup> MUÑOZ CONDE, F. *Manual de Derecho Penal, Parte Especial en colaboración con López Peregrín*, Tirant lo Blanc, 21ª ed., Valencia, 2017.

<sup>39</sup> En el artículo 18 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal, se establecía la apología como “*la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a sus autores. La apología solo será delito como forma de provocación, y si por su naturaleza y circunstancias constituye una invitación directa a cometer un delito*”.

*“exige en el ámbito subjetivo la finalidad o tendencia de querer incitar efectiva y realmente la comisión de delitos de terrorismo y no una mera afinidad ideológica o emocional con ella; en el ámbito objetivo, la creación de un riesgo que fomente la incitación a la violencia<sup>40</sup>”.*

El fino hilo que une este delito con el derecho a la libertad de expresión es explicado por el Tribunal Supremo al indicar que *“el llamado discurso de odio, entendido como la alabanza o justificación de acciones terroristas, no merece la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresión, ya que el terrorismo constituye la más grave vulneración de los derechos humanos de la comunidad y genera un terror colectivo como medio con el que conseguir esas finalidades<sup>41</sup>”.*

Finalmente, muy relevante fue el pronunciamiento del Tribunal Constitucional relativo a la apología e incitación a bandas terroristas disueltas o sin actividad, así el tribunal establece que *“cuando un grupo terrorista hace ya tiempo ha cesado en su actividad terrorista o se ha disuelto, y no hay constancia de que pueda reaparecer, teniendo en cuenta que los mensajes que el acusado vertió en su cuenta de Facebook no tuvieron la menor repercusión o respuesta en la misma, no cabe apreciar la existencia de un delito de enaltecimiento del terrorismo [...]”<sup>42</sup>.*

---

<sup>40</sup> STS 378/2017, de 25 de Mayo.

<sup>41</sup> STS 224/2010, de 3 de Marzo.

<sup>42</sup> STC 112/2016, de 20 de Junio.



## **4. ARTÍCULO 578 DEL CÓDIGO PENAL: EL ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO.**

### **4.1. INTRODUCCIÓN:**

Tras la Reforma del año 2015, se ha producido un gran avance en la legislación española en materia de terrorismo, así, se han creado delitos como el de capacitarse para cometer actos terroristas, el desplazamiento a los lugares de comisión del delito, o servir a los intereses de las organizaciones que controlan los lugares donde se ejecutan actos violentos, con la finalidad de conseguir los objetivos terroristas<sup>43</sup>.

En general, la adopción de estos nuevos delitos deviene de la preocupación internacional por el auge de los actos terroristas, y, por ello, buena parte de estas reformas provienen de la propia legislación europea<sup>44</sup>.

Así, destacamos la Directiva UE 2017/541, de 15 de Marzo, relativa a la lucha contra el terrorismo, en la que se establece un marco legislativo para todos los países de la UE en relación con la apología al terrorismo, y que actualmente complementa a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia.

Lo fundamental de esta Directiva, y en general de toda la legislación y jurisprudencia europea, es el requisito que incluye para que un delito pueda considerarse enaltecimiento del terrorismo, esto es que se aprecie un riesgo de comisión de un delito

---

<sup>43</sup> Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal.

<sup>44</sup> Artículo de Opinión: *Interpretación del Enaltecimiento de Terrorismo conforme a la Directiva UE 2017/541, de 18 de Marzo*, Javier Muñoz Cuesta. Fiscal del Tribunal Supremo, Revista Aranzadi Doctrinal Num.8/2017, Editorial Aranzadi, 2017.

de terrorismo<sup>45</sup>.

## 4.2 BIEN JURÍDICO PROTEGIDO:

En la exposición de motivos de la Ley 7/2000<sup>46</sup>, se contemplan varios aspectos que nos permiten delimitar el bien jurídico protegido de este delito: “[...] No se trata, con toda evidencia, de prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrina, por más que estas se aleguen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional...”, sino que [...] tan sencillo como perseguir la exaltación de métodos terroristas [...], que producen perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal”.

El propio Tribunal Supremo ha delimitado el bien jurídico protegido del delito de enaltecimiento del terrorismo, estableciendo: “La finalidad de la tipificación de tales conductas es combatir la actuación dirigida a la promoción pública de quienes ocasionan un grave quebranto en el régimen de libertades y en la paz de la comunidad con sus actos criminales, abortando toda clase de justificación y apoyo para lo que no son sino cumplidos atentados contra la significación más profunda del propio sistema democrático<sup>47</sup>”.

Por ello, la opinión generalizada de la doctrina y la jurisprudencia es la de

---

<sup>45</sup> Preámbulo de la Directiva UE 2017/541, de 15 de Marzo, relativa a la lucha contra el terrorismo.

<sup>46</sup> Ley Orgánica 7/2000, de 22 de Diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de Enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo.

<sup>47</sup> STC 587/2013, 28 de Junio de 2013.

considerar que el bien jurídico protegido de este delito es la paz y el mantenimiento del orden público<sup>48</sup>.

En todo caso, el Tribunal Supremo y diversos autores coinciden en que el terrorismo, y todo lo derivado del mismo, no solo tiene como objetivo individuos concretos, sino que, a diferencia de otros delitos, entre sus fines está también acabar con la democracia en el Estado en el que actúan<sup>49</sup>.

Respecto a las conductas humillantes a las víctimas o sus familiares, conductas que los tribunales diferencian de las meramente enaltecedoras, la doctrina considera que deben equipararse a los delitos de honor, y, por tanto, consideran que precisamente el honor y la dignidad son los bienes jurídicos protegidos en este subtipo<sup>50</sup>.

#### **4.3 PRECEPTO PENAL:**

Este delito tiene un sujeto activo bastante amplio, en cuanto a que no es necesario que este forme parte de una organización terrorista, sino que basta con que el individuo realice la acción típica, esto es, la justificación o el enaltecimiento. Por lo tanto, nos encontramos ante un delito común<sup>51</sup>.

---

<sup>48</sup> Artículo de Opinión: *Delitos de Terrorismo-El enaltecimiento del Terrorismo*. Guadalupe Domínguez Dueñas, Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 2017.

<sup>49</sup> DORADO PORRAS, J. *Terrorismo, Justicia Transicional y grupos Vulnerables*, Madrid, Editorial Dykinson, 2014.

<sup>50</sup> STS 53/1985, de 11 de Abril.

<sup>51</sup> MÁRQUEZ GONZÁLEZ, O. *La Coautoría: delitos comunes y especiales*. Revista Diálogos y Saberes, p.29-50, 2008.

En cuanto al sujeto pasivo, tenemos que diferenciar entre el primer subtipo del artículo 578 CP, en el que el sujeto pasivo puede ser cualquier individuo, y el segundo subtipo, que exige necesariamente que el sujeto pasivo sea una víctima<sup>52</sup> de terrorismo o familiares de esta.

De una forma breve, y en lo relativo al concepto de víctima, la Ley 29/2011, de 22 de Septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, establece que se considerará como tal a: “*las personas fallecidas o que han sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, o las personas que, en el supuesto de fallecimiento de la víctima, puedan ser titulares de las ayudas o de los derechos por razón del parentesco, o la convivencia o relación de dependencia con la persona fallecida*”<sup>53</sup>.

Respecto a la conducta típica, debemos primero introducir el contenido del artículo 578, tal y como se recoge en el Código Penal actual:

*“1. El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El juez también podrá acordar en la sentencia,*

---

<sup>52</sup> Respecto al concepto de víctima, ver también la Ley 35/95, de 11 de Diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual o la Ley 32/1999, de 8 de Octubre, de Solidaridad con las Víctimas de Terrorismo.

<sup>53</sup> Artículo 4 de la Ley 29/2011, de 22 de Septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

*durante el período de tiempo que él mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57.*

*2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información.*

*3. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad o parte de ella se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado.*

*4. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos o cualquier otro soporte por medio del que se hubiera cometido el delito. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación se acordará la retirada de los contenidos.*

*Si los hechos se hubieran cometido a través de servicios o contenidos accesibles a través de internet o de servicios de comunicaciones electrónicas, el juez o tribunal podrá ordenar la retirada de los contenidos o servicios ilícitos. Subsidiariamente, podrá ordenar a los prestadores de servicios de alojamiento que retiren los contenidos ilícitos, a los motores de búsqueda que supriman los enlaces que apunten a ellos y a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que impidan el acceso a los contenidos o servicios ilícitos siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:*

*a) Cuando la medida resulte proporcionada a la gravedad de los hechos y a la relevancia de la información y necesaria para evitar su difusión.*

*b) Cuando se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a los que se refieren los apartados anteriores.*

*5. Las medidas previstas en el apartado anterior podrán también ser acordadas por el juez instructor con carácter cautelar durante la instrucción de la causa”.*

El tipo objetivo de este delito contiene una conducta alternativa, esto es, “enaltecer” o “justificar” las conductas tipificadas en los artículos 572 a 577 CP, produciéndose una agravación de las penas cuando medie publicidad a través de servicios o medios de comunicación en la conducta realizada.

Se decanta por tanto el legislador por un tipo abierto, en el que no se concreta cuáles son las conductas perseguibles, siendo el Tribunal Supremo el encargado de establecer los elementos necesarios para que se pueda aplicar este tipo penal.

Así, se establecen tres requisitos que deben concurrir conjuntamente para poder apreciar la conducta<sup>54</sup>:

- La existencia de una acción o unas palabras que enaltezcan<sup>55</sup> o justifiquen<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> STS 149/2007, de 26 de Febrero.

<sup>55</sup> Según la doctrina del Tribunal Supremo, enaltecer equivale a ensalzar o hacer elogios, alabar las cualidades o méritos de alguien o de algo (STS 149/2007).

<sup>56</sup> Según la doctrina del Tribunal Supremo, justificar quiere decir que se hace aparecer como acciones lícitas y legítimas aquello que solo es un comportamiento criminal (STS 149/2007).

- La justificación o el enaltecimiento debe ser relativa a alguna de las conductas comprendidas en los artículos 572 a 577; o bien, a las personas que hayan participado en esos comportamientos.
- La acción o las palabras deben realizarse a través de una expresión pública o con difusión.

Se recoge no solo el enaltecimiento o la justificación como conductas penalmente reprochables, sino también la humillación a las víctimas y sus familiares, pero con un notable matiz, esto es, que no se requiere ningún tipo de publicidad de la conducta, bastando con que el mensaje llegue a la víctima o a un familiar para que el tipo se cumpla.

En los apartados segundo y cuarto, se aprecia la magnitud e importancia que este delito alcanza con las nuevas tecnologías. Así, junto con la agravación de la pena debido al uso de medios de comunicación, se contempla la destrucción de todos los archivos y pruebas que contengan las manifestaciones enaltecedoras, humillantes, o justificantes del terrorismo.

Resulta importante aclarar que, en el ámbito de las redes sociales, nuestros tribunales consideran que la mera publicación de mensajes enaltecedores, humillantes, o justificantes de conductas terroristas, independientemente del número de seguidores o de la privacidad o no de estas cuentas, resultan penalmente perseguibles<sup>57</sup>.

Asimismo, en el apartado tercero se produce la agravación de la pena cuando la conducta altere la paz pública o cree sentimientos de miedo o temor. Por tanto, vemos cómo en la búsqueda del equilibrio entre derechos y responsabilidad penal, el legislador

---

<sup>57</sup> SAN 2/2012, de 17 de Enero.

introduce una serie de criterios -a su juicio graves- para que solo las conductas especialmente reprochables sean las más duramente castigadas.

En el ámbito subjetivo, el enaltecimiento supone la existencia de dolo en la conducta del sujeto activo, no abarcando la conducta la comisión por imprudencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 12 del CP<sup>58</sup>.

La necesidad de que el dolo abarque una conducta con intención directa de humillar a las víctimas, o defender los ideales de un grupo terrorista, ha ido variando por la jurisprudencia de nuestros tribunales, y, a tenor de las últimas sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, parece no ser necesario más que el mero conocimiento de la conducta que persigue el tipo<sup>59</sup>.

#### **4.4. PENALIDAD:**

El artículo 578 CP introduce una pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. Adicionalmente, se contempla la posibilidad de imponer alguna pena accesoria de las contenidas en el artículo 57 CP<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> Artículo 12 CP: *“Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley”*.

<sup>59</sup> A tal efecto, en el presente trabajo se discutirá sobre el dolo y su alcance en este delito, mediante el estudio y comentario de la STS 4/2017, relativa al Caso Strawberry y la STS 79/2018, relativa al caso Valtonyc.

<sup>60</sup> Para el caso del enaltecimiento del terrorismo, se contempla una pena accesoria de hasta 5 años entre las siguientes: privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, o prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal



Asimismo, se establecen dos agravaciones de pena cuando los hechos puedan llegar a alterar la paz pública o crear sentimientos de temor o inseguridad, y cuando se difundan a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información.

Se incluye dentro del tipo la destrucción o borrado de los archivos o soportes que contengan los mensajes enaltecedores, justificantes o humillantes del terrorismo y sus víctimas, indicando la posibilidad de que se retiren los contenidos de los medios de información y comunicación en los que aparezcan.

Además, el Código Penal permite que el Juez obligue a los responsables de las plataformas web a retirar los contenidos, a los motores de búsqueda a suprimir los enlaces que llevan a ellos, y a los proveedores de servicios a restringir su acceso<sup>61</sup>.

Tras la Reforma del año 2015 estas medidas pueden acordarse como medidas cautelares por el juez instructor de la causa.

Por otra parte, aunque ya hemos hablado de la figura del sujeto activo de este delito, es preciso realizar una aclaración para aquellos casos en los que el delito se comete en una red social o un medio de difusión de similares características.

---

por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual.

<sup>61</sup> Estas medidas deberán acordarse por el Juez de forma proporcional a la gravedad de los hechos, la importancia de la información, o la necesidad de evitar su difusión.

Así, el Tribunal Supremo ha establecido que en aquellos casos en los que la conducta enaltecedora, humillante o justificante se desarrolle en Internet, y más concretamente en páginas web o redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter...), podrá considerarse como sujeto activo a aquellas personas que difundan o compartan estos mensajes<sup>62</sup>.

## **5. RELACIÓN ENTRE LOS DELITOS DE ODIO Y ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO.**

De una manera genérica, podemos afirmar que en estos dos delitos encontramos una fuerte oposición de la sociedad, por el choque que representa su presencia en nuestra legislación frente al derecho a la libertad de expresión.

Partiendo de esta premisa, un simple vistazo al bien jurídico protegido por ambos delitos nos permite realizar una conexión entre ambos, así, en los delitos de odio se protege el derecho a la no discriminación de un colectivo por razones de raza, sexo, ideología, religión, etc. En los delitos de terrorismo, incluyendo el de enaltecimiento y humillación de las víctimas, generalmente estos ataques se desarrollan igualmente por razones políticas, ideológicas, religiosas...etc., esto es, el ataque terrorista, aunque no siempre, suele fundarse en motivos discriminatorios.

Tal y como he indicado anteriormente, el derecho a la libertad de expresión puede verse comprometido en ambos delitos, debido al fino límite existente entre este derecho y las expresiones que se viertan, expresiones que pueden contener un discurso de odio, o de ensalzamiento o humillación a las víctimas del terrorismo.

---

<sup>62</sup> STS 706/2017, de 27 de Octubre.

Resulta especialmente relevante que ciertas expresiones, aunque inapropiadas, criticables, y fuera de contexto, se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión, y, por tanto, en ambos delitos, debe existir un especial deber de cuidado por parte de nuestro legislador y de los tribunales en la aplicación de estos tipos penales.

Aunque resultaría erróneo indicar que los delitos de odio pueden considerarse subsidiarios del enaltecimiento del terrorismo, sí que debemos señalar la posibilidad de que, ante la gravedad de estos últimos, muchas de las expresiones que actualmente se investigan por la posible comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo, en realidad enmascaran un discurso de odio, y, por tanto, pueden subsumirse más correctamente en este tipo de delitos.

## **6. CASO PRÁCTICO: PROFESORES CATALANES TRAS EL 1 DE OCTUBRE.**

### **6.1 INTRODUCCIÓN AL SUPUESTO:**

En el presente supuesto, analizaremos las actuaciones llevadas a cabo contra una serie de profesores de distintos colegios de Cataluña, tras la actuación policial (Guardia Civil y Policía Nacional) durante el 1 de Octubre.

Destacar que en este caso no comentaremos una Sentencia, sino un Auto procedente de la Audiencia Provincial de Lérida, así como diversas actuaciones del Ministerio Fiscal y de varios Juzgados de Instrucción.

La particularidad de este supuesto en relación con la posible comisión de varios delitos de odio, entre otros, ha servido para que me decantase por analizar estos hechos y sus consecuencias jurídicas, pese a no tratarse de procesos con Sentencia firme.

En primer lugar, debemos destacar que, tras la jornada del 1 de Octubre, padres de alumnos de distintos colegios denunciaron a varios profesores por haber dirigido al alumnado en el que se incluían sus propios hijos manifestaciones en contra de la Guardia Civil y Policía Nacional, a cuyos Cuerpos de Seguridad pertenecían los denunciantes.

Las actuaciones llevadas a cabo se desarrollaron en el Juzgado de Instrucción número 1 de Seu d'Urgell, elevadas estas posteriormente a la Audiencia Provincial de Lérida, y en los Juzgados de Instrucción números 3 y 7 de Martorell.

Los hechos objetos de investigación tuvieron lugar en el Colegio Mossèn Vives de Seu d'Urgell (Lérida), y en el Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), abriéndose diligencias contra un total de 18 profesores.

## **6.2 COLEGIO SEU D'URGELL:**

El Juzgado de Instrucción número 1 de La Seu d'Urgell inició la instrucción de la causa por la posible comisión de un delito de odio, en virtud del Atestado incoado por la Dirección General de la Guardia Civil, a raíz de las denuncias formuladas por algunos padres de alumnos del centro Mossèn Vives de La Seu d'Urgell (entre otros de esta localidad).

En el Atestado se indicaba que los profesores habían realizado comentarios hacia sus alumnos tales como “*la Guardia Civil es mala*”, “*hay que votar por Cataluña*” o “*los Mossos d'Esquadra defienden a la gente*”, afirmando incluso que un alumno había sido agredido por ser hijo de un miembro de la Guardias Civil, y que se entregó a los niños

un comunicado en el que se informaba a los padres que el día 3 de Octubre el centro permanecería cerrado en protesta por los incidentes del 1 de Octubre<sup>63</sup>.

Se sostenía, por tanto, que los alumnos se encontraban en una situación de acoso por parte de sus profesores como consecuencia única de ser hijos de miembros de los referidos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Se produce la incoación de Diligencias Previas para la comprobación de los hechos y personas intervinientes, incluyendo los hechos desarrollados el día 3 de Octubre, en relación con unas actividades desarrolladas por el Colegio por una huelga general instada por la Generalidad de Cataluña.

Se hace hincapié en que la edad de los alumnos y la autoridad que sobre ellos ostentan los profesores podrían haber provocado que los últimos indujeran a los primeros a la comisión de hechos discriminatorios, de odio o de violencia<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> Respecto a esta fase de la instrucción, los hechos descritos en el presente trabajo, se recogen a partir de la transcripción del Auto AP de Lérida 228/2018, de 12 de Junio.

<sup>64</sup> Respecto a estas manifestaciones, las mismas se incluyen en el presente trabajo a tenor de lo dispuesto en el Auto AP de Lérida 228/2018, de 12 de Junio, y en una noticia contenida en la página web del periódico ABC, bajo el titular: *Un juez investigará a los profesores de un colegio catalán por incitar al odio a sus alumnos*. En la noticia se transcribe el Auto emitido por el Juzgado Número 1 de Seu d'Urgell y se indica: “los alumnos son de edades muy tempranas y en consecuencia moldeables, máxime por quien ostenta un principio de autoridad frente a ellos. Por ello, podría ser que los profesores y el director incitaran de manera directa a sus alumnos a la comisión de hechos mínimamente concretados de los que pueda predicarse la discriminación, el odio, hostilidad o la violencia» contra la Guardia Civil. Hasta tal punto existen indicios de lo indicado que, según se relata en la denuncia, un alumno de dicho centro habría sufrido

Tras la práctica de las diligencias consideradas necesarias, pertinentes y útiles, el Instructor declaró el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de seis de los investigados, en virtud de lo dispuesto en el art. 642 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECrim)<sup>65</sup>, denegando implícitamente el archivo respecto de las investigadas Otilia y Patricia<sup>66</sup>.

Tras esta decisión, se presentan los correspondientes recursos de reforma y subsidiarios de apelación por las defensas de todas las partes, interesando el sobreseimiento libre de la causa, al entender que el instructor había actuado con incongruencia al declarar el sobreseimiento provisional respecto de unos investigados frente a otros, sin aclarar los motivos a los que se debe esta decisión, así como al estimar que con las pruebas practicadas se demuestra que los hechos no encajan dentro del ámbito de aplicación del artículo 510.1 CP, y, por tanto, que no son constitutivos de delito.

---

*humillaciones, insultos e incluso agresiones al ser su madre miembro de la Guardia Civil, y ser este hecho conocido por el resto de alumnos y profesores”.*

<sup>65</sup> Artículo 642 LECrim: *“Cuando el Ministerio Fiscal pida el sobreseimiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 637 y 641, y no se hubiere presentado en la causa querellante particular dispuesto a sostener la acusación, podrá el Tribunal acordar que se haga saber la pretensión del Ministerio Fiscal a los interesados en el ejercicio de la acción penal para que dentro del término prudencial que se les señale comparezcan a defender su acción si lo consideran oportuno. Si no comparecieren en el término fijado, el Tribunal acordará el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Fiscal”.*

<sup>66</sup> Auto AP de Lérida 228/2018, de 12 de Junio.

El Auto emitido por la Audiencia Provincial de Lérida, Sección Primera, en el que ya adelantamos que se estiman los recursos planteados declarando el sobreseimiento libre de la causa, se corresponde con el número 228/2018, de 12 de Junio.

Procediendo a analizar el Auto, los magistrados comienzan haciendo una descripción de lo que supone la instrucción de una causa, y de las consecuencias de la investigación tras su finalización, esto es:

*“[...] llevar a cabo las actuaciones dirigidas a la indagación o comprobación de los hechos presuntamente delictivos [...] así como de las circunstancias que rodearon su perpetración, dejando constancia de lo averiguado...”.*

*Ahora bien, si tras la investigación que se desarrolla bajo la dirección del Juez de Instrucción, las diligencias practicadas de oficio o a instancia de parte no aportan esos indicios, estará justificado el sobreseimiento provisional, debiendo ser libre si dicha investigación descarta la existencia del delito<sup>67</sup>”.*

Los objetivos de la instrucción, resultan en este proceso muy relevantes, dado que la Audiencia Provincial estima que, tras las averiguaciones acontecidas, los hechos no se pueden subsumir en ningún delito contemplado en el Código Penal, y lo hace tras poner énfasis en el contenido de las sentencias del Tribunal Supremo 72/2018, de 9 de Febrero y del Tribunal Constitucional 112/2016, de 20 de Junio, las cuales perfilan los límites del derecho a la libertad de expresión:

*“La Sala considera que los hechos denunciados no son constitutivos del delito de incitación al odio que se imputa a los investigados.*

---

<sup>67</sup> Auto AP de Lérida 228/2018, de 12 de Junio.

[...].

*Todos los investigados han venido a negar los hechos que se les imputaban, señalando los directores de los diferentes centros docentes que, a raíz de las denuncias interpuestas por algunos de los padres, se reunieron con ellos a fin de poder solucionar cualquier situación conflictiva que pudieran crearse [...].*

*Y es que, del resultado de las inspecciones llevadas a cabo por el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en los diferentes centros docentes [...] se deriva que el clima en las aulas es correcta sin que nadie refiera la existencia de incidentes destacables [...].*

*Por otro lado, otros padres también pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Civil manifestaron en sus respectivos centros que sus hijos no tenían problema alguno con sus compañeros, ni con sus profesores, acudiendo a la escuela con total normalidad [...].*

*Y es que también debe valorarse el momento en que tuvieron lugar los hechos que se imputan a los investigados, al día siguiente de la celebración del denominado "referéndum d'autoderminació de Catalunya", con los graves incidentes que ese día tuvieron lugar, y a los cuales no pudieron ser ajenos los menores -por más que ello hubiera sido lo deseable-, quienes sin duda pudieron oír comentarios al respecto tanto en el ámbito escolar como también fuera de él. Pero lo que en modo alguno resulta acreditado es que si algún incidente se ha podido producir entre los alumnos, ello haya sido a consecuencia de la incitación o con la anuencia del centro o de alguno de sus docentes”.*



De la lectura del Auto se desprende que la Audiencia no solo considera los hechos como no probados, sino que, de haberse desarrollado, estos no constituirían un delito de odio recogido en nuestro Código Penal.

Así, se indica que no queda probado que las expresiones se efectuaran, o que se realizaran delante de los alumnos, y que, de la exploración a los menores y la aparente normalidad existente en las aulas, se deduce la inexistencia de un clima de odio.

Lo más importante de este Auto es, sin duda, la interpretación que hace en relación al delito de odio y la libertad de expresión, así se indica que las expresiones imputadas en ningún caso constituirían un delito, en cuanto que, pese a que estas son totalmente *“inadecuadas, inapropiadas, fuera de lugar o imprudentemente vertidas, teniendo en cuenta el ámbito en que se profirieron y la corta edad de los menores”*, no constituyen incitación alguna al odio y a la violencia contra un grupo determinado (requisito indispensable para la aplicación del artículo 510 CP), dado que no se trata ni de un grupo discriminado o amenazado, ni se ha incitado a la lesión de alguno de sus derechos.

### **6.3 COLEGIO EL PALAU DE SANT ANDREU DE LA BARCA:**

En este caso, los hechos se corresponden con manifestaciones supuestamente acontecidas en el mencionado colegio de Barcelona.

La primera denuncia se tramita en el Juzgado Número 3 de Martorell, y se dirige contra un docente que, supuestamente, el día 20 de Octubre habría pedido a alumnos hijos

de Guardias Civiles que levantasen las manos, para comprobar si iban a participar en la huelga de estudiantes convocada para días posteriores<sup>68</sup>.

La segunda denuncia se produce contra nueve profesores del mismo Centro, por sus comentarios hacia alumnos hijos de Guardias Civiles, recayendo en el Juzgado de Instrucción Número 7 de Martorell. Destacar, que la causa contra cinco de esos profesores fue directamente archivada sin tomarles declaración, continuando el procedimiento contra otros cuatro<sup>69</sup>.

Según el fiscal, los profesores se dirigieron contra algunos de sus alumnos en los siguientes términos: *"los guardias civiles son unos animales, solo saben dar palos"; "parecen perros rabiosos";* o *"¿estarás contento con lo que hizo ayer tu padre?"*.

En otra clase, las manifestaciones habrían sido las siguientes: *"No me encuentro en disposición de dar clases normal por lo acontecido en el día de ayer, ya que la Policía y la Guardia Civil me han tratado a palos, porque son unos animales y unos bestias que solo saben dar palos"*<sup>70</sup>.

En este caso, los juzgados de Martorell no se han pronunciado aun sobre los cuatro profesores que siguen investigados, continuando las Diligencias Previas sobre ellos.

En todo caso, sobre las manifestaciones presuntamente realizadas y su posible inclusión en nuestra legislación penal como delitos de odio, me remito al apartado del

---

<sup>68</sup> <https://www.elperiodico.com/es/politica/20180510/juez-archiva-denuncia-profesores-sant-andreu-de-la-barca-6811516>.

<sup>69</sup> [https://www.eldiario.es/catalunya/politica/denuncia-profesores-acusados-humillar-guardias\\_0\\_769923998.html](https://www.eldiario.es/catalunya/politica/denuncia-profesores-acusados-humillar-guardias_0_769923998.html).

<sup>70</sup> <https://www.diariosur.es/nacional/levanten-mano-hijos-20180424000940-ntvo.html>.

presente trabajo donde daré mi opinión personal al respecto, opinión que, ya adelanto, sigue el mismo razonamiento que la Audiencia Provincial de Lérida en el supuesto anterior.

Entiendo en este caso que lo más lógico es el sobreseimiento libre de la causa, y, en su defecto, que la Audiencia Provincial de Barcelona siga los mismos razonamientos que su homónima en el supuesto anterior.

## **7. CASO PRÁCTICO: CASO VALTONYC Y CÉSAR STRAWBERRY.**

Procederé a analizar ambas sentencias, sus antecedentes y conclusiones, antes de realizar un comentario sobre sus aspectos comunes.

### **7.1 CASO CESAR STRAWBERRY:**

Cesar Montaña Lehmann alias “*Cesar Straw Berry*”, fue absuelto en la sentencia 20/2016, de 18 de Julio, por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas (art.578 CP).

Esta sentencia fue revocada por el Tribunal Supremo en su pronunciamiento 4/2017 de 18 de Enero, al estimar, al contrario que la Audiencia Nacional, la concurrencia de los delitos ya citados.

Para situarnos en el caso, enunciaré algunas de las expresiones vertidas por el condenado, mediante tweets, en la red social Twitter:

*"Franco, Serrano Súñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar... si no le das lo de Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre a su lado".*

*"El fascismo sin complejos de Aguirre me hace añorar hasta a los GRAPO".*

*"A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora".*

*"Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina".*

Como resultado de sus manifestaciones sobre los GRAPO (organización terrorista), sobre Ortega Lara (actualmente miembro del partido político VOX, secuestrado por ETA cuando ejercía de funcionario de prisiones), y por retuitear la expresión<sup>71</sup>: *"¿Se puede llevar una camiseta un estampado de Miguel Ángel Blanco? -Lo pregunto desde el respeto y el verano"* (muerto a manos de ETA por su condición de Concejal del Partido Popular), fue acusado de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas.

La Audiencia Nacional absolvió al cantante al estimar que las expresiones no constituían un delito de apología del terrorismo, al entender que los mensajes se desarrollaron: *"con un tono crítico con la realidad social y política, tratando que el público comprenda el sentido metafórico y ficticio que envuelven sus obras, respecto al concepto de fondo siempre de carácter pacífico y exclusivamente cultural"*<sup>72</sup>.

¿En que difiere el Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional? - Para responder esta pregunta analizaremos uno por uno los argumentos esgrimidos por el Alto Tribunal.

---

<sup>71</sup> A tal efecto recordar la ya mencionada STS 706/2017, de 27 de Octubre, en la que el Tribunal Supremo condena como autor de un delito de humillación a víctimas y enaltecimiento del terrorismo a personas que compartieron tweets (mediante retuiteos).

<sup>72</sup> SAN 20/2016, de 18 de Julio.

Así, ya habíamos comentado que el Tribunal Supremo había dejado a un lado la interpretación relativa a que el dolo abarcara una idea exacta de defender al terrorismo o humillar a las víctimas, sino que basta con conocer los elementos del tipo y asumir la justificación de la violencia.

A tal efecto, en la sentencia comentada se hace hincapié en que no se debe analizar uno por uno los comentarios que el rapero hizo, entendiendo el tribunal que:

*“Entre otras razones, porque esos complementos explicativos no se incluyen en el mensaje de burla. Éste llega a la víctima en su integridad, sin matices aclaratorios de la verdadera intención del autor que los suscribe. La memoria de su propia tragedia no adquiere otra tonalidad cuando el dictamen pericial concluye que ha sido expresado con sátira o que es fruto de la crítica ácida<sup>73</sup>”.*

El Tribunal Supremo entiende, por tanto, que la intención directa o no de humillar a las víctimas y enaltecer al terrorismo, resulta irrelevante, cuando el resultado que se persigue evitar se produce.

Tampoco resulta pacífica la interpretación que realiza el tribunal respecto a la existencia de un discurso de odio amparado o no por el derecho a la libertad de expresión individual.

El Tribunal Supremo realiza una amplia argumentación sobre el discurso de odio, en el que defiende la idea de la libertad de expresión como predominante en nuestra sociedad, estimando que no todos los mensajes que excedan la libertad de expresión constituyen de por sí un delito.

---

<sup>73</sup> STS 4/2017 de 18 de Enero.

No se pretende castigar el humor o las expresiones de crítica generales, sino que el tribunal entiende que se refiere a personas con nombre y apellidos, que vivas o muertas, han padecido los estragos del terrorismo<sup>74</sup>.

Es precisamente su condición de víctimas del terrorismo lo que genera una especial protección, que impide que sus causantes sean condenados por otros delitos menores (p.e. un delito de injurias).

La procedencia o no de esta protección ya no reside en manos de los tribunales que únicamente aplican la Ley, sino que se encuentra en manos del legislador; sin embargo, creo necesario avanzar que la impetración que realiza el Tribunal Supremo se aleja de lo entendible como razonable, frente a la que realiza a mi entender de una forma más aceptable, y de acuerdo con la jurisprudencia del TEDH, la Audiencia Nacional.

Finalmente, manifiesta el Tribunal Supremo que, en aquellos casos de publicaciones en redes sociales y por ende, en Internet, su difusión es mayor que la de cualquier otro medio y, por tanto, se debe ser muy cuidadoso con lo que se publica, pero también mantener un exceso de celo en la interpretación de la posible comisión de delitos.

El número de destinatarios, su alcance, el mayor daño causado, y la presencia permanente de las manifestaciones, son entendidos por el Tribunal Supremo como factores a tener en cuenta para ponderar entre el daño causado y el derecho a la libertad de expresión.

---

<sup>74</sup> En la mencionada Sentencia se indica literalmente: *“las manifestaciones se han referido a unas personas a las que se las identifica con nombres y apellidos”*.

## 7.2 CASO VALTONYC:

José Miguel Arenas Beltrán, alias “Valtonyc”, fue condenado en la Sentencia 4/2017, de 21 de Febrero, por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas (art.578 CP), calumnias e injurias graves a la Corona (art.490.3 CP) y por un delito de amenazas no condicionales (art.169.2 CP).

Destacar que en el presente trabajo, y en lo concerniente a la Sentencia, solo me referiré a los delitos que estamos analizando, esto es, el enaltecimiento del terrorismo y la humillación a las víctimas.

Esta Sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en su pronunciamiento 79/2018 de 15 de febrero, al estimar todos los argumentos esgrimidos por la Audiencia Nacional.

Para situarnos en el caso, enunciaré algunas de las expresiones vertidas en sus canciones por el rapero (entre los años 2012 y 2013):

*"Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear", "queremos la muerte para estos cerdos", "llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos en el palacio del Borbón, kalashnikov", "le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta", "queremos la muerte para todos estos cerdos".*

*"Que tengan miedo joder. Que tengan miedo"; "Que tengan miedo como un guardia civil en Euskadi"; "Un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre algún GRAPO"; "Dicen que pronto se traspasa la cloaca de Ortega Lara y muchos rumorean que Rubalcaba merece*

*probarla, complejo de zulo mi casa a ver si un día secuestro alguno y le torturo mientras le leo al Argala”; “Queremos que el miedo llame a sus puertas con llamas”; “O que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada”; “Me cansa tanto silencio en medio de esta guerra”; “Y mira yo no tengo huevos a pillar una metralleta, pero al menos no condeno al que se atreve y al que a la lucha se aferra, partidos revisionistas me la coméis entera, no resistiríais ni la mitad de cadenas que arrastra Arenas”.*

*Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza, ETA es una gran nación”; “Tu bandera española está más bonita en llamas, igual que un puto patrol de la guardia cuando estalla”; “no voy a callar más, voy a luchar aunque tenga que pillar una pipa como Froilan Marichalar”; “Si no tienes memoria se repetirá la historia y estarás condenado como un txacurra en Vitoria, Gloria!”; “Gloria! es Andrea Fabra durmiendo en la calle, y que un parado le rompa las costillas con un bate”; “Que no se alarme nadie la justicia es simple, pero está de vacaciones con Publio Cordón en el caribe”;*

Estas expresiones resultan, en mi opinión, las más características y las que más inciden en la posible comisión de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del artículo 578 CP.

Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo condenaron al cantante al estimar que las expresiones eran constitutivas de los delitos anteriormente señalados, al no encontrarse protegidos por el derecho a la libertad de expresión y cumplir con todos los requisitos necesarios.

Procede, por tanto, analizar todos los argumentos esgrimidos por ambos tribunales para llegar a la conclusión de la culpabilidad de “Valtonyc”.



En primer lugar, se introduce el derecho a la libertad de expresión y su aplicación al caso en concreto. Para rebatirlo, la Audiencia Nacional se ampara en la doctrina del Tribunal Constitucional, recordando que este derecho no es absoluto, indicando que:

*“[...] aun cuando se tiene que atender al principio de proporcionalidad para la sanción penal de determinadas expresiones que limiten el ejercicio de la libertad de expresión, este derecho no opera cuando entra en conflicto con otros derechos o intereses constitucionales, como sucede, por ejemplo, con expresiones que son manifestaciones del discurso de odio<sup>75</sup>”.*

Esta interpretación unida a la jurisprudencia del TEDH, y a los cuerpos legales nacionales e internacionales, es secundada por el Tribunal Supremo, al hacer suyos los argumentos del tribunal de instancia, argumentos que redundan en que las expresiones sobrepasan la libertad de expresión, con indiferencia del objetivo final del causante, esto es, el Tribunal Supremo vuelve a incidir en el resultado lesivo y contrario a Derecho causado.

En segundo lugar, se defiende la correcta aplicación del artículo 578 CP, volviendo a recordar que solo nos centraremos en los delitos en él recogidos, a pesar de que el cantante fuera condenado por más delitos.

El Tribunal Supremo rechaza este argumento, y así lo indica al manifestar que la Audiencia Nacional no realiza ningún tipo de interpretación sobre las expresiones, sino que se limita a exponerlas y subsumirlas en los tipos penales que estima convenientes, a tal efecto, citamos al tribunal de casación:

---

<sup>75</sup> SAP 4/2017, de 21 de Febrero.

*“...En nuestro caso basta leer los hechos declarados probados, para comprender la gravedad de las expresiones contenidas y su correcto encaje en los tipos penales de referencia<sup>76</sup>”.*

Se trata de ponderar entre el derecho y sus límites, entendiendo ambos tribunales que la proporcionalidad y demás requisitos que exige el Tribunal Constitucional, al amparo de la legislación y jurisprudencia europea, para poder sancionar penalmente estas expresiones, queda totalmente razonada en los argumentos de la sentencia de instancia.

Merece por ello la pena introducir el extracto de la sentencia de la Audiencia Nacional a tal respecto:

*“La pluralidad de mensajes contenidos en las canciones publicados en Internet y con acceso abierto por el acusado tienen un indudable carácter laudatorio de las organizaciones terroristas GRAPO y ETA y de sus miembros, el cual va más allá de la expresión de coincidencia con objetivos políticos, solidaridad con los presos o camaradería nacida de vínculos ideológicos y que comporta una alabanza, no ya de los objetivos políticos sino de los medios violentos empleados por la citadas organizaciones terroristas y por sus miembros y contienen una incitación a su reiteración. Los referidos contenidos no quedan amparados por la libertad de expresión o difusión de opiniones invocada por el acusado y su defensa”<sup>77</sup>.*

El sentido de ambas sentencias que condenan a “Valtonyc”, puede resumirse por tanto en expresiones perfectamente subsumibles en la legislación penal vigente, al no quedar amparados por el derecho a la libertad de expresión, derecho considerado no absoluto por nuestro Tribunal Constitucional, al producirse una colisión con otros derechos fundamentales, y exceder las manifestaciones de la habitual crítica u opinión,

---

<sup>76</sup> STS 79/2018, de 15 de Febrero.

<sup>77</sup> SAP 4/2017, de 21 de Febrero.

dirigiéndose contra sujetos concretos, y generando un mensaje de odio y de enaltecimiento.

## **8. OPINIÓN PERSONAL:**

Respecto a mi opinión personal sobre el contenido de este trabajo, he de destacar que me centraré, no en la legislación vigente en relación con los delitos de odio y de enaltecimiento del terrorismo, sino en la jurisprudencia y doctrina emanada de nuestros Tribunales sobre la aplicación y requisitos para que estos delitos puedan ocurrir, esto es, realizaré un comentario sobre las sentencias y el auto incluidos en el trabajo.

Pese a ello, sí que me gustaría hacer una breve referencia a los artículos 578 y 510 de nuestro Código Penal. Así, en mi opinión, mientras que los preceptos legales que regulan los delitos de odio se encuentran perfectamente delimitados en relación con el derecho a la libertad de expresión, pese a la posible mejoría en la redacción y redundancia de algunos supuestos, máxime cuando se encuentran en consonancia con la interpretación acordada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin embargo, no podemos decir lo mismo respecto al precepto penal que regula el enaltecimiento del terrorismo y la humillación a las víctimas, en cuanto a que hoy en día los tribunales están condenando por estos preceptos acciones que nada tienen que ver con el terrorismo.

A tal efecto, en mi opinión este artículo debería regularse por nuestro legislador de una forma más clara y concreta, para evitar este tipo de situaciones, y así mismo, modular la respuesta penal en función de la gravedad de los hechos, de tal manera que se introduzcan otras penas como las multas, en detrimento de las penas privativas de libertad, para los supuestos más leves.

Respecto a las sentencias que he introducido en el presente trabajo, en primer lugar haré referencia a las dos que condenan por enaltecimiento del terrorismo.

Analizando ambas sentencias, tengo que expresar que, en mi opinión, se produce una equivocada interpretación por parte del Tribunal Supremo, así, vemos como este incide en el resultado producido, y no en el contexto en el que estas manifestaciones se producen.

Resulta evidente que una persona, sin conocimiento alguno de la causa, que leyera las expresiones contenidas en las canciones de ambos raperos concluiría que se está humillando a las víctimas y que se está cometiendo un enaltecimiento del terrorismo, sin embargo, en este tipo de delitos en los que puede verse comprometido el derecho a la libertad de expresión, y que además se contienen en un capítulo especialmente grave como es el de terrorismo, entiendo que tiene que procederse con mayor cautela por parte de los tribunales, cautela que, en mi opinión, no se está produciendo.

De esta manera, si analizamos el contexto en el que las manifestaciones se han producido, podemos comprobar cómo, en el caso de César Strawberry, lleva dedicándose a la música más de 30 años, incluyendo en sus canciones letras muy similares por las que ahora ha sido condenado ¿Qué ha sucedido para que ahora estas manifestaciones se persigan?, en mi opinión nada, máxime cuando bandas terroristas como ETA ya no actúan, y dado que la jurisprudencia del TEDH cada vez es más tendente a la protección del derecho a la libertad de expresión.

Por tanto, en mi opinión, en ambos casos los acusados deberían haber sido absueltos, el criterio inicial de la Audiencia Nacional absolviendo a Strawberry, no solo debería haber sido aplicado en ese caso por el Tribunal Supremo, sino que es extensible al caso Valtonyc.

Fundamentando más mi opinión, entiendo que la interpretación que hace el Tribunal Supremo respecto a que el dolo en este delito solo abarque que el autor comprenda el tipo penal, y el resultado producido, es un error, entendiendo que el Alto Tribunal elimina un requisito indispensable como es la intención de los autores de las expresiones.

Y solo basta con leer sus canciones, para comprobar que no se pretende ensalzar el terrorismo o humillar a las víctimas, sino que las letras únicamente contienen un mensaje crítico frente a la sociedad y sus miembros.

Es cierto que algunas manifestaciones de estos raperos se dirigen contra víctimas reales del terrorismo, con nombres y apellidos, y por tanto personas concretas, pero, de nuevo, mi opinión es que el Tribunal Supremo vuelve a caer en el mismo error anterior, así, aunque estas manifestaciones puedan incurrir en un atentado contra la dignidad y el honor de estas víctimas, entiendo que, en todo caso, estas manifestaciones deberían ser perseguidas mediante otros preceptos penales.

Para ser más concretos, burlarse de una persona que ha padecido de las acciones del terrorismo, por más reprochable que sea, no es enaltecimiento del terrorismo, y tampoco es humillación a las víctimas, cuando estas humillaciones no van en consonancia con la actividad terrorista, como resulta evidente en este caso.

Dado que, de lo contrario, estaríamos introduciendo estas conductas en el marco del terrorismo, cuando, por su gran gravedad, estos preceptos deberían estar reservados para grupos o asociaciones criminales que realmente realicen actos de terrorismo, o personas que verdaderamente ensalcen sus acciones.

Con ello, no quiero decir que las manifestaciones que se han hecho no sean punibles penalmente, sino que deberían incluirse en otro precepto penal muy distinto al del enaltecimiento del terrorismo, especialmente debido a las graves penas que este tipo penal incluye, y que se puede llegar a limitar derechos como la libertad de expresión.

Finalmente, y respecto al delito de odio y el supuesto práctico que he comentado, relativo a los profesores catalanes tras el 1 de Octubre, en mi opinión esta vez sí se produce una correcta decisión por la Audiencia Provincial de Lérida, y por los juzgados que instruyeron las distintas causas.

En primer lugar, manifestar un principio básico que ha establecido en su Auto la Audiencia Provincial de Lleida, a partir del cual, aunque las manifestaciones pudieran ser objeto de un delito contemplado en nuestro Código Penal, y más concretamente en un delito de odio, si estas no resultan probadas, la decisión más oportuna y de hecho obligada por el Principio de Presunción de Inocencia (Art. 24. 1 CE) es la del sobreseimiento libre de la causa.

De esta manera, resulta en mi opinión criticable la actuación del juez de instrucción de Seu d'Urgell, en cuanto que decide mantener a tres de las profesoras imputadas, cuando el criterio del Ministerio Fiscal, y del propio juez instructor, fue el de acordar el sobreseimiento provisional respecto de los otros 6 acusados, sin que aparentemente haya motivo para tal diferenciación.

Centrándonos en la discusión jurisprudencial, en cuanto a si cabe o no incluir estas manifestaciones en el delito de odio, volvemos a destacar lo mismo que ya anunciamos con el delito de enaltecimiento de terrorismo, estamos hablando de un delito que colisiona

con un derecho fundamental como es la libertad de expresión, y, por lo tanto, los tribunales deben ser especialmente cautos en su aplicación.

Si leemos las expresiones supuestamente vertidas por los profesores, es cierto que en una primera impresión pueden parecer subsumibles en un delito de odio, sin embargo, basta con una lectura del artículo 510 del Código Penal, para ver que se exige una serie de requisitos que en este caso no vemos cumplidos.

Así, la acción de odio debe dirigirse contra un grupo determinado que sea especialmente vulnerable, y en ese supuesto vemos que este requisito no se cumple.

Es cierto que, tras el 1 de Octubre, se produce tanto en los días anteriores como posteriores, un sentimiento contrario a estas fuerzas y cuerpos de seguridad, pero el hecho de que, en un determinado momento, puedan verse atacadas, no es suficiente en mi opinión para que puedan considerarse un grupo especialmente vulnerable.

Asimismo, tampoco se desarrollan expresiones que inciten al odio y a la violencia, en el sentido de que es preciso que las manifestaciones vayan dirigidas a la lesión de derechos de ese determinado colectivo, lo cual no concurre en este supuesto.

Las expresiones pueden ser reprochables, desde un punto de vista penal, por otro tipo de delitos como por ejemplo el delito de injurias, pero entiendo que podemos afirmar si ningún tipo de duda que no concurren los requisitos necesarios para la comisión de un delito de odio.

## **9. CONCLUSIONES:**

Los constantes cambios que se desarrollan en nuestra sociedad suponen sin ningún género de duda, un gran impacto sobre la regulación de los delitos de odio y de enaltecimiento del terrorismo.

A partir de lo indicado, podemos hacer las siguientes afirmaciones:

- 1.** Estos cambios anteriormente mencionados dificultan enormemente que el legislador pueda contemplar todas las nuevas formas en las que los delitos, y especialmente los delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo, pueden desarrollarse. De esta manera, el trabajo conjunto de todos los Estados, especialmente de los Estados miembros de la Unión Europea, se configura como indispensable y fundamental.
- 2.** Tras la Reforma del año 2015, no han cesado las críticas en torno al artículo 510 CP, en cuanto a que muchos autores consideran que su redacción sigue sin ser clara, y que, además, este delito supone una vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión, y por tanto dudan de su constitucionalidad.
- 3.** Esta crítica, aunque bien argumentada, no es entendible por mi parte, al considerar que, si se analiza correctamente el bien jurídico protegido, y su naturaleza jurídica, pueden perseguirse conductas reprochables, sin que se produzca limitación alguna de los derechos y libertades fundamentales. Para ello, los Tribunales tienen una función indispensable, debiendo asegurar el correcto uso de este tipo penal, en los casos en los que sí proceda, esto es, cuando medie el discurso del odio.
- 4.** La aplicación del artículo 578 CP, también trae consigo una crítica similar en cuanto a la posible limitación de derechos fundamentales, concretamente del derecho a la libertad de expresión, que su aplicación puede conllevar.



5. A tal efecto, y como ya indiqué anteriormente en lo relativo al artículo 510 CP, se trata de críticas que, aunque bien encaminadas, no deben limitar la actividad del Estado, quien acertadamente insta este precepto penal para cubrir todas las eventuales actividades de una organización terrorista. Por tanto, corresponde de nuevo al poder judicial la correcta aplicación de este precepto y el respeto al derecho fundamental a la libertad de expresión.
6. Así, la protección de estos derechos resulta evidente con la diferenciación que hace nuestro legislador, al distinguir, en la imposición de penas, entre expresiones que produzcan sentimientos de miedo o alteren la paz pública y las meras expresiones que simplemente enaltecen o justifican conductas terroristas.
7. La clave para determinar si a una conducta le es aplicable el tipo penal del artículo 578, o no, resulta según la jurisprudencia europea de comprobar si se ha creado un riesgo de comisión de delitos de terrorismo, interpretación a mi modo de entender, totalmente lógica, y que pone de manifiesto que actualmente los tribunales españoles no aplican correctamente el tipo penal del enaltecimiento al terrorismo.
8. Así, en las dos sentencias comentadas relacionadas con los raperos Valtynec y Strawberry, podemos apreciar cómo, en un exceso de celo, se condena por enaltecimiento del terrorismo (entre otros delitos), por unas canciones cuyo contenido es evidentemente reprochable, pero, en mi opinión, excede del ámbito de aplicación del artículo 578 CP, pues realmente el objetivo de esas canciones no es ensalzar al terrorismo, sino, como expresé más arriba, la realización de una crítica social.
9. Finalmente, y en relación con los delitos de odio, debemos manifestar que a menudo estos se confunden con mensajes injuriosos, que se encuentran en el límite del derecho a la libertad de expresión, pero sin que se produzca la requerida amenaza de lesión de derechos a grupos vulnerables.

## 10. BIBLIOGRAFÍA:

Las obras, artículos, legislación y jurisprudencia, que he consultado y estudiado para realizar mi trabajo, son los siguientes:

### 1. OBRAS:

- DORADO PORRAS, J. *Terrorismo, Justicia Transicional y grupos Vulnerables*, Madrid, Editorial Dykinson, 2014.
- FRANCISCO MORALES, J, y YUBERO JIMENEZ, S. *Del prejuicio al racismo: perspectivas psicosociales*, Colec. Estudio, Cuenca, 1996, p.11 y ss.
- GARCÍA ALVAREZ, P. *El Derecho Penal y la Discriminación*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004, p. 65 y ss.
- MACHADO RUIZ, M.D. *La Discriminación en el Ámbito de los Servicios Públicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 131 y ss.
- MÁRQUEZ GONZÁLEZ, O. *La Coautoría: delitos comunes y especiales*. Revista Diálogos y Saberes, p.29 a 50. 2008.
- MUÑOZ CONDE, F. *Manual de Derecho Penal, Parte General en colaboración con García Arán*, Tirant lo Blanc, 9ª ed., Valencia, 2015.
- MUÑOZ CONDE, F. *Manual de Derecho Penal, Parte Especial en colaboración con López Peregrín*, Tirant lo Blanc, 21ª ed., Valencia, 2017.
- ROIG TORRES, M. *Los delitos de Racismo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 1255.

- PORTILLA CONTRERAS, G. *La represión penal del ‘discurso del odio*, Comentario a la reforma penal de 2015, Thomson Reuters-Aranzadi, 2015, p.722.
- TAPIA BALLESTEROS, P. *La discriminación laboral*, Tirant lo Blanch, Valencia 2014, p. 141-143.

## 2. ARTÍCULOS Y OTRAS PUBLICACIONES:

- Artículo de Opinión: “*El odio al diferente: un delito tipificado en el Código Penal*”, Javier Nistal Burón, jurista del Cuerpo Superior de Instituciones Penitenciarias.
- Artículo de Opinión: *Delitos de Terrorismo-El enaltecimiento del Terrorismo*. Guadalupe Domínguez Dueñas, juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 2017.
- Artículo de Opinión: *El Enaltecimiento del Terrorismo*, Juan Manuel Fernández Martínez. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Revista Aranzadi Doctrinal Num.10/2010, Editorial Aranzadi, 2010.
- Artículo de Opinión: *Interpretación del Enaltecimiento de Terrorismo conforme a la Directiva UE 2017/541, de 18 de Marzo*, Javier, Muñoz Cuesta. Fiscal del Tribunal Supremo, Revista Aranzadi Doctrinal Num.8/2017, Ed. Aranzadi, 2017.
- Comentarios prácticos al Código Penal. Tomo VI. Editorial Aranzadi, S.A.U., Enero de 2015. ISBN 978-84-9098-845-9.
- Cuarto Informe sobre la Evolución de los Incidentes relacionados con los Delitos de Odio en el Reino de España del año 2016.
- Guía Práctica: “*Legislación sobre los Delitos de Odio*”. Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODHIR). Traducción al español del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

- Informe de Delimitación Conceptual en Materia de Delitos de Odio: Estudio encargado por la Comisión de Seguimiento del Convenio de colaboración y cooperación Interinstitucional contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia y financiado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Autor: D. Juan Alberto Díaz López, Profesor, Doctor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid (Marzo de 2018).
- Ponencia del Fiscal del Tribunal Supremo D. Manuel-Jesús Dolz Lago: *Los Delitos de Odio en el Código Penal tras la Modificación Operada por la LO 1/2015- Breve Referencia a su Relación con el Delito del Art. 173 CP.*

### 3. LEGISLACIÓN:

- Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de Diciembre de 2006.
- Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de Noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal.
- Directiva UE 2017/541, de 15 de Marzo, relativa a la lucha contra el terrorismo.
- Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
- Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal.
- Ley Orgánica 4/1995, de 11 de Mayo, de modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la apología de los delitos de genocidio (DEROGADA).

- Ley Orgánica 7/2000, de 22 de Diciembre, de modificación de la Ley diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de Enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo.
- Ley 29/2011, de 22 de Septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
- Ley 35/1995, de 11 de Diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual.
- Ley 32/1999, de 8 de Octubre, de Solidaridad con las Víctimas de Terrorismo
- Undécima Reunión del Consejo Ministerial 1 y 2 de Diciembre de 2003: *Estrategia de la OSCE frente a las amenazas contra la estabilidad y la seguridad en el siglo XXI*, Maastricht, 2003. Respuestas nº 37 y nº38.

#### **4. JURISPRUDENCIA:**

- Sentencia del Tribunal Constitucional 112/2016, de 20 de Junio.
- Sentencia del Tribunal Constitucional 235/2007, de 7 de Noviembre.
- Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 de Abril.
- Sentencia del Tribunal Supremo 79/2018, de 15 de Febrero.
- Sentencia del Tribunal Supremo 72/2018, de 9 de Febrero.
- Sentencia del Tribunal Supremo 706/2017, de 27 de Octubre.
- Sentencia del Tribunal Supremo 378/2017, de 25 de Mayo.
- Sentencia del Tribunal Supremo 4/2017 de 18 de Enero.
- Sentencia del Tribunal Supremo 587/2013, de 28 de Junio.

- Sentencia del Tribunal Supremo 224/2010, de 3 de Marzo.
- Sentencia del Tribunal Supremo 149/2007, de 26 de Febrero.
- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Caso “*Feret vs. Belgium*”, de 16 de Julio de 2009.
- Sentencia de la Audiencia Nacional 4/2017, de 21 de Febrero
- Sentencia de la Audiencia Nacional 20/2016, de 18 de Julio.
- Sentencia de la Audiencia Nacional 2/2012, de 17 de Enero.
- Auto de la Audiencia Provincial de Lérida 228/2018, de 12 de Junio.

## **5. OTROS:**

- Diccionario Real Academia Española.
- Página oficial del Ministerio del Interior del Reino de España.
- Diario ABC, S.L.
- Diario digital El Diario de Prensa Digital, S.L.
- Diario Sur: Prensa Malagueña, S.A.

